

De Grange y la deuda de 30 mil millones de pesos en el ministerio de Transportes

“No es solo un desorden administrativo, es más grave, es un tema de irresponsabilidad financiera”

El biministro comenta que detectaron millonarias deudas de arrastre de la administración Boric, por no pago a proveedores de servicios de transporte público.

ARIEL LARA

En una semana marcada por cuestionamientos surtidos a la gestión del gobierno de Gabriel Boric, el actual biministro de Obras Públicas y Transportes (MTT), Louis de Grange, aseguró que detectaron que la cartera de Transportes tiene deudas arrastradas desde la administración anterior por cerca de 30 mil millones de pesos, por pagos pendientes a proveedores y operadores de servicios de transportes desde el año 2022.

Postergaciones

Los pagos postergados de los años 2022, 2023, 2024 y 2025 fueron, como se dice en buen chileno, chuteados para este año, lo que según el secretario de Estado sin duda afecta el funcionamiento del ministerio en el presente. Se explica, por ejemplo, que hay operadores de buses de transporte público en regiones que cumplieron con su recorrido pactado, y aún no reciben el pago por los servicios prestados.

En conversación con este diario, De Grange explica que “detectamos que se trataría de una práctica consistente de no pagar, porque no había plata; dice Louis de Grange. Esto habría implicado que la administración anterior fuera demorando los pagos hasta ahora, con casos que vienen incluso de hace cuatro años. En total, detectamos problemas en 111 contratos con distintos operadores del transporte público de regiones, que incluyen a comunas rurales, zonas aisladas, por ejemplo barcazas en la zona austral. Éste no es solo un desorden administrativo, yo creo que es más grave; es un tema de irresponsabilidad financiera”.

Y detalla: “Cuando empezamos la investigación fueron los mismos operadores que nos comenzaron a alertar de los pagos pendientes de servicios que se habían prestado. De hecho, incluso frente al alza del petróleo, fueron ellos mismos los que nos dieron a conocer que el mayor dolor de muchos, sobre todo pequeños operadores en regiones, no era tanto el alza del petróleo, sino que eran las deudas pendientes. Hay operadores que cumplen un rol fundamental de conectividad en zonas aisladas de regiones y no se les pagaba desde julio del año pasado. Por ejemplo, hace un mes tuvimos un paro en el transporte público del Gran Valparaíso, particularmente con los operadores de Marga Marga, a quienes se les adeudaba más de 3.000 millones de



“Detectamos que se trataría de una práctica consistente de no pagar, porque no había plata; dice Louis de Grange.”

pesos desde septiembre del año pasado. Esta movilización fue por las deudas y no por el alza en el precio internacional de los combustibles”.

Cuenta que también, “había operadores que son clave en algunas comunas rurales, y que se les adeuda entre \$800 millones y \$900 millones y están a punto de quebrar o dejar de proveer el servicio, y por lo tanto, nuestra reacción automática fue tratar de agilizar, acelerar, y ponernos al día”.

Desde el MTT afirman que el tipo de la deuda heredada a 2026 corresponde al Subsidio Nacional al Transporte Público destinado al transporte público en regiones, lo que corresponde a más de \$26 mil millones. “Dentro de ese subtotal, destacan los montos asociados a conectividad de zonas aisladas y rurales por casi \$6 mil millones, deudas por el congelamiento tarifario por más de \$5 mil millones, y deudas por la rebaja de tarifa en buses de sectores urbanos por más de \$11 mil millones, por ejemplo. “También se registra deuda heredada en Subsidios al Transporte Regional por \$778 millones y en Tarifa Rebajada Adulto Mayor Regionales por \$260 millones.

En datos proporcionados por Transportes se aprecia que en 2022 el gobierno de Gabriel Boric recibió de la administración de Sebastián Piñera, deudas por compromisos con operadores de transporte por \$2.059.327.203. Ese monto aumentó a más de 27 mil millones de pesos a 2026 cuando el gobierno anterior le traspasó el mando al Presidente Kast.

Si bien es habitual que se traspase deuda de un gobierno a otro por compromisos adquiridos, no es normal el elevado monto, según se comenta por postergación reiterada de pagos, según se comenta.

¿Cómo se detectó esta deuda de 30 mil millones desde 2022?

“Cuando asumimos el pasado 11 de marzo, empezamos a revisar los distintos contratos vigentes y el estado de pago de estos. Fue durante este mismo período cuando algunos operadores nos comenzaron a alertar que existían pagos pendientes de servicios que se habían prestado. Los hallazgos fueron detectados en compromisos de años anteriores que no contaban con los trámites administrativos necesarios. En varios casos había respaldo, pero en muchos no hubo ningún acto administrativo que hiciera que estos gastos fueran imputables a un presupuesto. Estas graves irregularidades hoy impactan de manera significativa en el presupuesto 2026. Son deudas llenas de irregularidades que revelan no solo desorden sino irresponsabilidad en la administración del Estado”.

¿Qué efectos concretos tiene esta millonaria deuda para el funcionamiento del ministerio?

“Este escenario nos puso en una situación muy compleja, porque fueron deudas que no fueron informadas oportunamente y que no estaban consignadas en el presupuesto de 2026. La magnitud da cuenta de una deuda heredada que compromete una parte relevante del presupuesto 2026, generando una presión

importante en él. Esto nos obliga a ordenar, priorizar y regularizar compromisos caso a caso y con prontitud, porque nuestra obligación es mantener operativos los servicios”.

También existen casos de operadores que por incumplimiento de sus contratos se les debió haber cobrado boletas de garantía o pólizas de seguro correspondientes, pero que no fueron cobradas durante años. A raíz de esta situación irregular, se iniciaron los sumarios administrativos que van a determinar las eventuales responsabilidades al respecto.

De Grange recalca que, “esta situación es extremadamente grave porque se comprometieron recursos públicos sin el resguardo de su correcto uso. Sin embargo, este escenario no pone en riesgo el financiamiento de los sistemas ni en la Región Metropolitana ni en regiones, porque esos son servicios que están presupuestados durante 2026”.

Y agrega que se trata de, “actos que podrían acarrear responsabilidades administrativas o demandas civiles. El gobierno anterior no transparentó estas deudas en el proceso de traspaso al actual equipo ministerial y comprometió recursos sin ningún respaldo para que se hiciera cargo el gobierno del Presidente José Antonio Kast. Dicho esto, estamos haciendo la investigación, levantando todos los antecedentes. Hay herramientas internas en los ministerios para revisar estos casos y vamos a cumplir con el rigor de la ley”.